

## **Colombia: Militarización al servicio del extractivismo**



No 41 / April 2014

### **War Profiteers' News**

*The email newsletter of WRI's Global Initiative on War Profiteers*

*El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Artículo publicado en Boletín de Especuladores de la Guerra de War Resister's International (WRI-IRG), Abril 2014*

<http://www.wri-irg.org/node/23010>

Tomàs Gisbert Caselli y Maria Jesús Pinto  
(en català e inglés debajo)

Las fuerzas armadas colombianas, con 281.400 efectivos son el segundo ejército más grande de toda Latinoamérica sólo superado por Brasil. A ellas hay sumar los 159.000 miembros de la Policía Nacional, policía militarizada que depende orgánicamente del Ministerio de Defensa. En Colombia hay 6,2 soldados por cada mil habitantes, ratio que casi cuatricula el de Brasil.

El auge de las actividades extractivistas minero-energéticas en Colombia de los últimos años ha venido acompañada de una fuerte militarización de las zonas donde el sector minero-energético opera. El gobierno colombiano ha creado a lo largo de los últimos años los

denominados Batallones Energéticos, Mineros y Viales. Su crecimiento ha acompañado la política de atraer la inversión extranjera de las empresas multinacionales del sector para la implementación de la política neoliberal extractivista: la denominada "locomotora minero-energética". Si a inicios de 2011 eran 11, en 2014 ya son 21 los batallones minero-energéticos.

Los Batallones Minero-Energéticos están formados por 80.000 efectivos, el 36% del total de efectivos del Ejército de Tierra en el que están encuadrados, y representan casi un 30% de las fuerzas armadas.

La fuerte militarización de las zonas extractivas no ha significado una mayor seguridad de las poblaciones afectadas. Censat Agua Viva y Mining Wacht Canadá advertían de que "las regiones ricas en recursos son la fuente del 87% de los desplazamientos forzados, 82% de las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, y 83% de los asesinatos de líderes sindicales".<sup>1</sup> La función de estas unidades, contra lo que pudiera parecer razonable, no es proveer seguridad pública sino asegurar las inversiones extranjeras y la extracción minero-energética.

Varios de estos batallones están radicados en el interior mismo de las instalaciones de las empresas o minas, como es el caso del Batallón Militar 15, localizado desde octubre de 2011 dentro de los campos petroleros de la multinacional Pacific Rubiales, en Puerto Gaitán, donde la empresa además les aporta vehículos y combustible. O el Batallón Energético Vial nº 8 radicado en los terrenos e instalaciones de la minera Frontino Gold Mines, en el municipio de Segovia, tal como indica la misma página web del Ministerio de Defensa.

La colaboración entre ejército e inversionistas es fluida. Como indica el director de operaciones del Ejército, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco,<sup>2</sup> el ejército analiza los proyectos que elaboran las propias empresas inversoras y los deriva a la división militar correspondiente para su protección.

Aunque las autoridades militares siempre lo han negado, hay evidencias de que la protección de las empresas extractivas conlleva la concertación de "convenios" privados entre empresas extractivas y las Fuerzas Armadas, en los que las empresas pagarían altas sumas económicas al ejército, a cambio de seguridad y poder desarrollar sus planes. Estos acuerdos son secretos pero han trascendido a los medios de comunicación ya sea por investigaciones periodísticas<sup>3</sup> o porque directivos de las mismas empresas, sin ningún pudor así lo han expresado<sup>4</sup>.

La comunidades locales afectadas ven con desconfianza el despliegue militar pues no sienten sus intereses protegidos por la fuerza pública,

sino que por el contrario ésta va asegurar las actividades extractivas, los intereses de las grandes empresas extractivas, en abierta contradicción con sus medios de vida tradicionales y el medio ambiente que los permite.

La presencia del ejército también ha ido acompañada de graves violaciones a los derechos humanos de esas zonas, de violaciones a las mujeres, de las ejecuciones extrajudiciales de los opositores y las opositoras a los proyectos mineros. Uno de los muchos casos denunciados fue en septiembre de 2006 el asesinato de Alejandro Uribe Chacón, opositor al proyecto de gran minería de la Kedhada SA en el sur de Bolívar, asesinado por efectivos del Batallón Antiaéreo nº2 Nueva Granada y presentado posteriormente como guerrillero dado de baja en combate, doce días después de que interpusiera una queja por presuntas persecuciones del ejército por sus denuncias contra la minera<sup>5</sup>.

También es significativo el caso del apoyo del ejército a la entrada de la empresa Muriel Mining Corporation en el Norte del Chocó, donde apoyó sus actividades a pesar de un proceso fraudulento de consulta previo, tal como dictaminó la Corte constitucional<sup>6</sup>, restringiendo la movilidad de los habitantes ancestrales en sus territorios y provocando graves abusos y el desplazamiento interno contra las poblaciones indígenas y afrocolombianas<sup>7</sup>.

Es evidente pues, que aunque estas unidades militares estén emplazadas en zonas dónde el conflicto con la insurgencia ha sido más agudo, y ese es el argumento que ha utilizado el gobierno para su existencia, el objetivo clave es la defensa de las transnacionales en contra de los derechos legítimos al territorio de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, lo que ha provocado fuertes conflictos sociales, masacres y desplazamientos directamente relacionadas con esta política invasiva, muchas de ellas realizadas en connivencia de ejército, paramilitarismo y empresas.

*Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz.  
María Jesús Pinto, activista e investigadora en Derechos Humanos*

-----  
1 Para mayor información ver "Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia" de Frédéric Massé y Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz. [http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen\\_ejecutivo\\_DDR\\_Definitivo.pdf](http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo_DDR_Definitivo.pdf)

Censat Agua-Viva y Mining Watch Canadá. "Tierras y conflicto - Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia". Septiembre de 2009, pág 2.

2 Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 febr.2014

3 Oro y plomo. Semana 28/07/2009 en <http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3>.

4 José Oro, vicepresidente de la Gran Colombia Gold manifestó en un documental realizado por periodistas franceses sobre la minería en Colombia: "Tenemos un contrato con la Policía, un contrato con el Ejército, un contrato con la Alcaldía" Langlois, Roméo y Mariani, Pascale, "Pour tout l'or de Colombie", Woow & Canal + Production, 2011

5 "Por 'falso positivo' con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares", en *El Espectador*,

<"><http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225504-falso-positivo-lider-comunal-llaman-juicio-cuatro-militares>>;

6 Sentencia de la Corte constitucional T-769/09

<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm>

7 "Estamos en desplazamiento forzado causado por la empresa Muriel Mining, en *Comisión Intereclesial de Justicia y Paz*,

<"><http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>>; (11.3.09).

## **Colòmbia: Militarització al servei del extractivisme**

Autors: Tomàs Gisbert i Maria Jesús Pinto

*L'auge de les activitats extractivistes miner-energètiques a Colòmbia dels últims anys ha vingut acompanyada d'una forta militarització de les zones on el sector miner-energètic opera. El govern colombià ha creat al llarg dels últims anys els anomenats Batallons Energètics, Miners i Vials. Article publicat a Notícies de los Especuladores de la Guerra (WRI-IRG), Abril 2014.*

Les forces armades colombianes, amb 281.400 efectius són el segon exèrcit més gran de tota l'Amèrica Llatina només superat per Brasil. A elles cal sumar els 159.000 membres de la Policia Nacional, policia militaritzada que depèn orgànicament del Ministeri de Defensa. A Colòmbia hi ha 6,2 soldats per cada mil habitants, ràtio que gairebé quadruplica el del Brasil.

L'auge de les activitats extractivistes miner-energètiques a Colòmbia dels últims anys ha vingut acompanyada d'una forta militarització de les zones on el sector miner-energètic opera. El govern colombià ha creat al llarg dels últims anys els anomenats Batallons Energètics, Miners i Vials. El seu creixement ha acompanyat la política d'atreure la inversió estrangera de les empreses multinacionals del sector per a la implementació de la política neoliberal extractivista: l'anomenada"

locomotora miner-energètica". Si a inicis de 2011 eren 11, el 2014 ja són 21 els batallons miner-energètics.

Els Batallons Miner-Energètics estan formats per 80.000 efectius, el 36% del total d'efectius de l'Exèrcit de Terra en el qual estan enquadrats, i representen gairebé un 30% de les forces armades.

La forta militarització de les zones extractives no ha significat una major seguretat de les poblacions afectades. Censat Aigua Viva i Mining Wacht Canadà advertien que "les regions riques en recursos són la font del 87% dels desplaçaments forçats, el 82% de les violacions als drets humans i al Dret Internacional Humanitari, i 83 % dels assassinats de líders sindicals"<sup>1</sup>. La funció d'aquestes unitats, contra el que podria semblar raonable, no és proveir seguretat pública sinó assegurar les inversions estrangeres i l'extracció miner-energètica.

Diversos d'aquests batallons estan radicats a l'interior mateix de les instal·lacions de les empreses o mines, com és el cas del Batalló Militar 15, localitzat des d'octubre de 2011 dins dels camps petrolers de la multinacional Pacific Rubiales, a Puerto Gaitán, on la empresa a més els aporta vehicles i combustible. O el Batalló Energètic Vial n ° 8 radicat en els terrenys i instal·lacions de la minera Frontino Gold Mines, al municipi de Segòvia, tal com indica la pròpia pàgina web del Ministeri de Defensa.

La col·laboració entre exèrcit i inversors és fluida. Com indica el director d'operacions de l'Exèrcit, coronel Jorge Arturo Matamoros Blanco<sup>2</sup>, l'exèrcit analitza els projectes que elaboren les mateixes empreses inversores i els deriva a la divisió militar corresponent per a la seva protecció.

Encara que les autoritats militars sempre ho han negat, hi ha evidències que la protecció de les empreses extractives comporta la concertació de "convenis" privats entre empreses extractives i les Forces Armades, en què les empreses pagarien altes sumes econòmiques a l'exèrcit, a canvi de seguretat i poder desenvolupar els seus plans. Aquests acords són secrets però han transcendit als mitjans de comunicació ja sigui per investigacions periodístiques<sup>3</sup> o perquè directius de les mateixes empreses, sense cap pudor, així ho han expressat<sup>4</sup>.

Les comunitats locals afectades veuen amb desconfiança el desplegament militar ja que no senten els seus interessos protegits per la força pública, sinó que per contra aquesta va adreçada a assegurar les activitats extractives, els interessos de les grans empreses extractives, en oberta contradicció amb els seus mitjans de vida tradicionals i el medi ambient que els permet.

La presència de l'exèrcit també ha anat acompanyada de greus violacions als drets humans d'aquestes zones, de violacions a les dones, de les execucions extrajudicials dels opositors i les opositores als projectes miners. Un dels molts casos denunciats va ser el setembre de 2006 l'assassinat d'Alejandro Uribe Chacón, opositor al projecte de gran mineria de la Kedhada SA al sud de Bolívar, assassinat per efectius del Batalló Antiaeri nº 2 Nova Granada i presentat posteriorment com a guerriller donat de baixa en combat, dotze dies després que interposés una queixa per presumptes persecucions de l'exèrcit per les seves denúncies contra la minera<sup>5</sup>.

També és significatiu el cas del suport de l'exèrcit a l'entrada de l'empresa Muriel Mining Corporation al Nord del Xocó, on va recolzar les seves activitats tot i un procés fraudulent de consulta prèvia, tal com va dictaminar la Cort constitucional<sup>6</sup>, restringint la mobilitat dels habitants ancestrals en els seus territoris i provocant greus abusos i el desplaçament intern contra les poblacions indígenes i afrocolombianes<sup>7</sup>

És evident doncs, que encara que aquestes unitats militars estiguin emplaçades en zones on el conflicte amb la insurgència ha estat més agut, i aquest és l'argument que ha utilitzat el govern per a la seva existència, l'objectiu clau és la defensa de les transnacionals en contra dels drets legítims al territori de les comunitats indígenes, camperoles i afrodescendents, el que ha provocat forts conflictes socials, massacres i desplaçaments directament relacionades amb aquesta política invasiva, moltes d'elles realitzades en connivència d'exèrcit, paramilitarisme i empreses.

*Tomás Gisbert, investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz.  
María Jesús Pinto, activista i investigadora en Drets Humans*

-----

1 Per a més informació veure "Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia" de Frédéric Massé i Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz.[http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen\\_ejecutivo\\_DDR\\_Definitivo.pdf](http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo_DDR_Definitivo.pdf).

Censat Agua-Viva y Mining Watch Canadá. "Tierras y conflicto - Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia". Setembre de 2009,

2 Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 febr.2014

3 Oro y plomo. Semana 28/07/2009 a

<http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3>

4 José Oro, vicepresident de la Gran Colòmbia Gold va manifestar en un documental realitzat per periodistes francesos sobre la mineria a

Colòmbia: "Tenim un contracte amb la policia, un contracte amb l'Exèrcit, un contracte amb l'Alcaldia" Langlois, Roméo i Mariani, Pascale , "Pour tout l'or de Colombie", Woow & Canal + Production, 2011

5 "Por 'falso positivo' con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares", a *El Espectador*,

<<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225504-falso-positivo-lider-comunal-llaman-juicio-cuatro-militares>>;

6 Sentència de la Cort constitucional T-769/09 <<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm>>;

7 "Estamos en desplazamiento forzado causado por la empresa Muriel Mining, a *Comisión Intereclesial de Justicia y Paz*, <<http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>>; (11.3.09).

## Colombia: Militarisation serving extraction

09 Mar 2014 — javier

*Tomás Gisbert & María Jesús Pinto*



The Colombian armed forces, with 281,400 military personnel, are the second largest army in all of Latin America, surpassed only by Brazil. Added to that are the 159,000 members of the National Police, a militarised police force that reports to the Ministry of Defence. In Colombia there are 6.2 soldiers per one thousand inhabitants, a ratio almost four times that of Brazil.

The surge in extractive mining and energy activities in Colombia over the last few years has come accompanied by the massive militarisation of the zones where the mining and energy sectors operate. The Colombian government has in recent years created what are known as Energy, Mining and Transport Battalions. Their growth has accompanied the policy of attracting foreign investment in the sector from multinational corporations for the implementation of the neoliberal extractive policy: the so-called 'mining and energy drive'. At

the beginning of 2011 there were 11 mining and energy battalions, but by 2014 there were already 21.

The Mining and Energy Battalions are composed of 80,000 troops, accounting for 37% of all land-based Army forces, which they're a part of, and almost 30% of the entire armed forces.

The mass militarisation of the extractive zones has not meant greater security for nearby populations. Censat Agua Viva and Mining Wacht Canada warned that 'the regions rich in resources are the source of 87% of forced displacements, 82% of human rights and international humanitarian law violations, and account for 83% of all assassinations of labour union leaders<sup>1</sup>. The purpose of these units, despite what would seem reasonable, is not to provide public safety but to safeguard foreign investment and the mining and energy extraction.

A number of these battalions are located within the premises of the companies or mines, as in the case of Military Battalion 15, located since October 2011 within the oilfields of the transnational Pacific Rubiales, in Puerto Gaitán, where the company also provides vehicles and fuel. Or the Energetic Transport Battalion Number 8, located on the lands and installations of Frontino Gold Mines in the municipality of Segovia, as indicated on the web page of the Ministry of Defence.

The collaboration between the army and investors is fluid. As stated by the Army's director of operations, Colonel Jorge Arturo Matamoros Blanco<sup>2</sup>, the army analyses the projects that the investing companies undertake and are assigned to the corresponding military division for their protection.

Even though the military authorities have always denied it, there is evidence that the extraction companies' protection leads to the negotiation of private 'agreements' between extractive businesses and the Armed Forces, in which the companies pay large sums to the army in exchange for security and the ability to carry out their plans. These agreements are secret but have come out in the media through investigative journalism<sup>3</sup> or because the managers of the companies themselves have unashamedly divulged the information.<sup>4</sup>

The affected local communities view the military deployments with distrust, as they don't feel their interests are being protected by the government security forces. They believe that the troops are there to ensure the extractive activities, in open contradiction with the communities' traditional ways of life and the environment that makes it possible.

The presence of the army has been accompanied by serious human rights violations in such areas, including rapes of women and extrajudicial executions of those who oppose the mining projects. One of many cases reported was the September 2006 murder of Alejandro Uribe Chacón, who opposed the huge mining project of Kadhada SA in the south of Bolívar province, murdered by troops of the Nueva Granada Number 2 Anti-air Battalion and subsequently presented as an armed guerrilla who fell in combat, twelve days after having lodged a formal complaint that he was being persecuted by the army due to his having lodged complaints against the mining company<sup>5</sup>.



Another significant case relates to the Army's aiding the entry of the Muriel Mining Corporation in Norte del Chocó, where it supported the company's activities despite a fraudulent public consultation, as ruled by the Constitutional Court<sup>6</sup>, restricted the mobility of ancestral inhabitants within their lands, and provoked serious abuses and the internal displacement of indigenous and Afro-Colombian populations<sup>7</sup>.

Thus it is obvious that even though these military units are deployed in areas where the conflict with the guerrilla insurgency has been most serious, which is the argument used by the government for their existence, the key goal is the defence of the transnational companies against the legitimate territorial rights of indigenous, farming and Afro-Colombian communities. This activity provokes major social conflicts, massacres and forced displacements directly related to the invasive policy, much of it carried out in collusion with the army, paramilitaries and companies.

## Notes

<sup>1</sup>Note. For more information see "Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia" by Frédéric Massé and Johana Camargo, CITpax-Observatorio Internacional sobre DDR y la Ley de Justicia y Paz. [http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen\\_ejecutivo...](http://www.citpaxobservatorio.org/sitio/images/stories/Resumen_ejecutivo...)

Censat Agua-Viva and Mining Watch Canadá. "Tierras y conflicto - Extracción de recursos, derechos humanos y la responsabilidad empresarial: compañías canadienses en Colombia". September 2009, page 2.

<sup>2</sup>Col-Prensa-Nuevo Dia, 4 February 2014

<sup>3</sup>Oro y plomo. Semana 28 July 2009 in <http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-plomo/105494-3>.

<sup>4</sup>José Oro, Vicepresident of Gran Colombia Gold stated in a documentary made by French journalists about mining in Colombia: 'We have a contract with the police, a contract with the army, a contract with the mayor's office' Langlois, Roméo and Mariani, Pascale, "Pour tout l'or de Colombie", Woow & Canal + Production, 2011

<sup>5</sup>"Por 'falso positivo' con líder comunal llaman a juicio a cuatro militares", in *El Espectador*, <<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-225504-falso-positivo-lider-comunal-llaman-juicio-cuatro-militares>>

<sup>6</sup>Constitutional Court ruling T-769/09 <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-769-09.htm>

<sup>7</sup>'We have been forcibly displaced by Muriel Mining' in *Comisión Intereclesial de Justicia y Paz*, <<http://justiciaypazcolombia.com/Estamos-en-desplazamiento-forzado>> (11.3.09).

*Tomás Gisbert, researcher at the Centre Delàs for Peace Studies.*

*María Jesús Pinto, humans rights activist and researcher*

Published in [War Profiteers' News](#), [April 2014](#), No. 41